DOCTRINA: PROVINCIA DE BUENOS AIRES: LA TASA DE INTERES COMPATIBLE CON EL CREDITO LABORAL

POR JOSÉ H. RODRÍGUEZ PONTE

El Tribunal de Trabajo N° 2 de Lomas de Zamora -que integro-, desde el 1-1-2001 viene aplicando la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, contrariando la doctrina legal de la S.C.J.B.A., pero por razones diversas a aquellas que fundan el criterio del Alto Tribunal Provincial para rechazarla, que se intentarán describir a continuación y que estimo no contempladas en los pronunciamientos que se citan infra.

Este Tribunal en muchos casos no se explicitó la motivación del apartamiento, hoy a partir de los precedentes de la SCBA "Ginossi..." (Sent. 21-10-09), "Vigueras..." (Sent. 17-3-10) y "Britte..." (Sent. 23-3-10), por razones de respeto y consideración que se tiene a nuestra más alta investidura judicial local, se impone justificar tal proceder.

En los precedentes citados se alude a la finalidad reparatoria, contenida en el art. 622 del Código Civil, como en que a falta de interés convenido o legal son los jueces quienes determinan el interés que se debe abonar y que conforme a la doctrina emanada de la C.S.J.N. en "Banco Sudameris..." (Fallos 317:507, Sent. 17-5-94), los tribunales inferiores cuentan con "razonable discreción" en torno a la determinación de la tasa de interés aplicable, donde el ejercicio de tal discrecionalidad no es abstracto.

Existe coincidencia en que debe contemplarse "...el menoscabo que el acreedor experimenta a raíz del retardo imputable al deudor en repararlo...", "...la no asunción en tiempo y forma de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad..." (voto del Dr. Genoud en "Vigueras...").

Sin embargo cabe diferenciar que cuando el derecho en cuestión se ejecuta contra el Estado, en forma razonable cabe presumir que esta despojado de un afán de lucro y eventualmente debería gozar de una alícuota atenuada, pues los transitorios atrasos motivados en razones presupuestarias que involucran a toda la sociedad justificarían la morigeración. Circunstancia que no cabe extender cuando se trata de particulares (CSJN in re "Valle...", sent. 5-7-05).

La motivación que guía aplicar la tasa activa al crédito del trabajador no "...implica alterar el sistema nominalista contemplado en la ley 23928, ratificado por la ley 25561, ya que la fijación judicial de la tasa de interés aplicable como resarcimiento por la indisponibilidad del capital adeudado es un aspecto diverso y que no corresponde confundir con el de la prohibición de actualizar, indexar o repotenciar las deudas dinerarias..." (voto del Dr. Hitters en "Britte ...").

En la elección de accesorios compensatorios no deben utilizarse "...los parámetros de una entidad financiera..." y "...antes que a criterios bancarios o mercantiles debe atenderse al armónico juego de diversos principios..." (voto del Dr. de Lazzari en "Britte..."). Ni su fundamento debe basarse en un análisis económico del país o al desarrollo económico, ya que tales juicios seguramente exceden el marco jurídico del caso y podrían comprometer la división de poderes.

La pauta de valoración para seleccionar el medio debe tener en mira el principio de igualdad ante la ley, pero en igualdad de circunstancias.

No resulta razonable que el acreedor laboral deba probar que ha debido endeudarse con el sistema financiero para cubrir el bache económico que le habría ocasionado la falta de pago oportuno del crédito reclamado.

Por otra parte el acreedor laboral no es igual al deudor laboral, ya que aquel posee un crédito alimentario, que cuando es despedido, deja de percibir su sustento y el de su familia.

La sanción de las leyes 24013, 25013, 25345, 25323, 25561, 25877, 26088, 26428, 26574 y 26590, resultan demostrativas de un interés preeminente del Estado Nacional de proteger el trabajo estable y registrado, como incentivar el cumplimiento de los débitos del empleador -en tiempo y forma-, durante el transcurso de la contratación y especialmente al momento de su extinción.

Coherentemente con tal finalidad la C.S.J.N. en el caso "Vizzoti..." (Sent. 14-9-04) consideró: "...necesario establecer un nexo entre la indemnización y la realidad concreta del trabajador dañado por la disolución del contrato laboral, dispuesta por el empleador sin justa causa, en tanto la reparación tiene contenido alimentario y se devenga generalmente, en situaciones de emergencia para el empleado...". Para continuar afirmando que: "El hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos estos, los cuales solo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad."

Con idéntico sentido la CSJN en "Aquino..." (Sent. 21-9-04) consideró: "El trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mero mercado económico y que se apoyan en principios, de cooperación, solidaridad y justicia (...) normativamente comprendidos en la Constitución Nacional (...) y ello sustenta la obligación de los que utilizan los servicios en los términos de las leyes respectivas, a la preservación de quienes los prestan.". "El art. 14 bis de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional."

"La manda constitucional del art. 14 bis, que tiene ya cumplidos 47 años a su vez, se ha visto fortalecida y agigantada por la singular protección reconocida a toda persona trabajadora en textos internacionales de derechos humanos que, desde 1994 tienen jerarquía constitucional (Const. Nac. art. 75 inc. 22).".

Finalmente no pueden dejar de considerarse aspectos procesales derivados de las demoras que sufren los juicios en arribar a una sentencia de condena, con responsabilidades compartidas entre los litigantes y los órganos judiciales, donde el alargamiento de las causas resulta una buena inversión para el deudor moroso que se constituyen en especulaciones antisociales, circunstancias estas que deben ser paliadas de alguna manera, teniendo en cuenta la desigualdad evidente entre el trabajador y el empresario.

Tampoco resulta ocioso recordar que el Estado en todos sus estadios, en pos de metas presupuestarias de equilibrio, si bien primero trata de premiar a los buenos contribuyentes, cuando estos se atrasan en los tributos los sanciona con elevadas tasas de interés, que a su vez se incrementan si se abren procesos judiciales. Lo mismo ocurre con el organismo recaudador AFIP. (ver a título ejemplificativo los arts. 86 y 87 de la ley 13405 y Res.492/06 del Ministerio de Economía y Planificación de la Nación).

Por todo ello se considera equitativo propiciar intereses equivalentes a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires (art. 622 Cód. Civil).